
Sentencia impugnada:	Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 2 de junio de 2017.
Materia:	Penal.
Recurrente:	Erwin Rafael Vásquez Jiménez.
Abogados:	Licda. Amaury Oviedo y Lic. Luis Alexis Espertín Echavarría.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidenta; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 de noviembre de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Erwin Rafael Vásquez Jiménez, dominicano, mayor de edad, unión libre, mecánico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2409588-1, domiciliado y residente en la calle 23, casa núm. 26, del sector Hato Mayor, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, imputado, contra la sentencia penal núm. 359-2017-SEN-0139, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 2 de junio de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído a la Licda. Amaury Oviedo, por sí y por el Licdo. Luis Alexis Espertín Echavarría, defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 11 de abril de 2018, en representación de la parte recurrente Erwin Rafael Vásquez Echavarría;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General Adjunto de la República, Lic. Carlos Castillo Díaz;

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Luis Alexis Espertín Echavarría, defensor público, en representación del recurrente Erwin Rafael Vásquez Jiménez, depositado el 20 de julio de 2017, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso casación;

Visto la resolución núm. 259-2018, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de enero 2018, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para conocerlo el 11 de abril de 2018;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y visto la Constitución de la República; los tratados internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

a) que el 29 de septiembre de 2011, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial Santiago presentó acusación y

solicitó apertura a juicio en contra del Erwin y/o Edwin Rafael Vásquez Jiménez (a) Cuchi, imputándolo de violar los artículos 4-D, 5-A 9-D, 58-A y 75 Párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas;

- b) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial Santiago, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante resolución núm. 486-2013 del 28 de octubre de 2013;
- c) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia penal núm. 0438-2015, en fecha 24 de agosto de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:

“PRIMERO: Declara al ciudadano Erwin Rafael Vásquez Jiménez, dominicano, mayor de edad, unión libre, ocupación mecánico, portador de la cédula de identidad y Electoral núm. 402 2409588 1, domiciliado y residente en calle 23, casa núm. 26, del sector Hato Mayor, Santiago, actualmente libre, culpable de cometer el ilícito penal de traficante de drogas, previsto y sancionado por los artículos 4 letra D, 5 letra A, categoría 11, acápite II, código (9041), 9 letra D, 58 letra A, 75 párrafo II, de la Ley SO 88, en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia se le condena a la pena de cinco (5) años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres; SEGUNDO: Se le condena además, al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD\$50.000.00); TERCERO: Se declaran las costas de oficios por estar asistido el imputado por un abogado defensor público; CUARTO: Ordena la destrucción por medio de la incineración de la droga a que hace referencia el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC2'20U 06 25 002142, de fecha 06-06-2011, consistente en veintinueve (29) porciones de Cocaína Clorhidratada, con un peso de nueve punto ochenta y seis (9.86) gramos; QUINTO: Acoge las conclusiones del órgano acusador, rechazando las de la defensa técnica del encartado, por improcedentes, mal fundadas y carente de base legal; SEXTO: Ordena a la secretaria común de este Distrito Judicial comunicar copia de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas, y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, una vez transcurran los plazos para la interposición de los recursos previstos”;

- d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la dictó su sentencia núm. 359-2017-SEEN-0139, el 2 de junio de 2017, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:

“PRIMERO: Declara con lugar en el fondo el recurso de apelación incoado siendo las 12: 54 horas de la tarde del día once (11) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), por el licenciado Luis Alexis Espertín Echavarría, quien actúa a nombre y representación de Erwin Rafael Vásquez Jiménez, en contra de la sentencia número 0438 2015 de fecha veinticuatro (24) del mes de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: Resuelve directamente la cuestión con base en la regla del artículo 422 (2.1) del Código Procesal Penal, y en consecuencia rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena formulada por el imputado Erwin Rafael Vásquez Jiménez; TERCERO: Confirma los demás aspectos de la sentencia impugnada; CUARTO: Compensa las costas”;

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, planteó los siguientes medios:

“Primer Medio: Sentencia de la Corte de Apelación es contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada”;

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se analizan en conjunto por su similitud y estrecha relación, alega en síntesis, lo siguiente:

“que tanto el tribunal de juicio como la corte, no valoraron de que en este caso hay muchas dudas que favorecen al imputado: el allanamiento fue dirigido en contra de dos apodos Cuchi y Bory, sin que nadie identificara que el recurrente le apoden Cuchi, porque en el juicio no testificó ningún testigo que señalaran al recurrente por ese apodo. Otra debilidad fuerte que tiene este caso es que la supuesta droga fue encontrada en una pared medianera, que tiene acceso el público y nadie vio que el recurrente colocara la droga en esa pared. A todas luces, la sentencia de la corte, al apoyar la sentencia del tribunal de juicio fue totalmente contrario a un fallo de la Suprema Corte de

Justicia, y verbigracias es la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de fecha 7 de septiembre del año 20015 (caso Mauro Peralta), estableció “Considerando, que, por otra parte, la errónea concepción de “presunción de culpabilidad”...Por ser el recurrente condenado por un hecho que no ha cometido”;

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-quá, dio por establecido, lo siguiente:

“Que del estudio y análisis de los elementos de pruebas administrados al plenario por el Representante del órgano acusador, los que integran este órgano pudimos establecer que ciertamente el encartado resulto arrestado en la circunstancia reseñada precedentemente, pues, si bien el imputado trató de sustraer de responsabilidad esgrimiendo el argumento precitado, el testigo a cargo, reiteramos si bien es cierto no depuso en sede de juicio, consigna en el acta levantada en ocasión del hallazgo de la droga, tenía informaciones fidedigna en el sentido de que éste se estaba dedicando junto al tal Bory, al trasiego de sustancias controlada en el lugar allanado, situación motivó se hicieran expedir la orden de allanamiento en su contra; siendo sorprendido huelga acotar, teniendo el dominio del material incriminatorio. De ahí, que deviene en imperativo el rechazo de las conclusiones principales de la Defensa Técnica del Justiciable, toda vez que su representado incurrió en contradicciones de versiones que lejos de sustraerlo de responsabilidad, apuntalan la conducta punible denunciada, pues sostuvo, que las autoridades primero lo detuvieron en la calle y luego lo trasladaron a un callejón, y allí sacaron la droga, manifestando uno de éstos, mire eso es suyo; y por otro lado, sostuvo que luego que lo detuvieron lo trasladaron a la casa donde funciona el repuesto, sacaron la droga y dijeron, mire lo que encontramos, eso es todo suyo, no siendo así. Así las cosas, es obvio las pruebas aportada por la acusación fueron más que suficientes para demostrar que violentó las disposiciones de la normas citadas en la categoría de Traficante de sustancias controladas, normas que pautan sanción para ilícitos de este tipo de cinco (5) a veinte (20) años, y Multa de Cincuenta Mil a Cien Mil Pesos, o igual al valor de la droga decomisada. Estimando el tribunal como sanción condigna aplicable al encartado cinco (5) años de prisión y multa de cincuenta mil pesos (RD\$50,000.00); a ser cumplida la sanción coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombre; rechazando así las conclusiones del Defensor Técnico del Imputado, por las razones expuestas, acogiendo las formuladas por el Ministerio Público, pues ha sido harto demostrado que se sustentan en pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia que amparaba al justiciable. Así las cosas, y tratándose la especie de un proceso normado por un procedimiento de justicia rogada, conforme los postulados del artículo 336 del Código el tribunal está en la obligación de contestar lo peticionado por las partes a los fines de legitimar los fundamentos de la decisión”;

Considerando, que del estudio y ponderación de los medios impugnados, los cuales se examinan de manera conjunta por guardar estrecha relación, así como de la sentencia recurrida, se advierte que el recurrente niega su responsabilidad en los hechos y señala que sus medios no fueron contestados; sin embargo, la Corte a-quá confirmó la sentencia de primer grado tras observar que quedó debidamente destruida la presunción de inocencia que le asiste al imputado, luego de ponderar el acta de allanamiento levantada por el fiscal actuante, la cual fue debatida en la fase de juicio, de conformidad con la norma procesal, en la que consta que la droga fue ocupada en presencia del imputado; señalando la Corte a-quá que el Tribunal a-quo no le dio credibilidad a las declaraciones del imputado, y que el referido fiscal realizó dicho allanamiento porque tenían informaciones de que el hoy imputado y un tal Bory se dedicaban a la venta de droga en el referido negocio; por consiguiente, la decisión impugnada no resulta contraria a los criterios sostenidos por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el estado de inocencia del imputado, y además acogió su tercer alegato, sobre lo cual decidió directamente, rechazando la solicitud de la suspensión condicional de la pena; por tanto, resulta evidente que la misma contestó cada uno de los medios planteados; en tal virtud, procede desestimar dicho recurso;

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del departamento judicial correspondiente, para los fines de ley que procedan;

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: *“Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales.*

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública.

Por tales motivos, por tales motivos la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Erwin Rafael Vásquez Jiménez, contra la sentencia penal núm. 359-2017-SSEN-0139, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 2 de junio de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas;

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.poderjudici